

Alejarse del Acuerdo de paz que lideró en La Habana, Cuba, romper relaciones con la dirección de su partido Farc, y no posesionarse como congresista de la República, le pasó ayer cuenta de cobro a Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez.

En una decisión unánime, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, decidió decretar la pérdida de investidura del exguerrillero. “Sin justa causa, sin que existiera una circunstancia que pueda ser considera de fuerza mayor, dejó de posesionarse en el cargo para el cual fue designado por su partido”, aseveró Lucy Jeanette Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado.

Entre otras razones para despojarlo de su curul, el alto tribunal indicó que frente a los argumentos de falta de seguridad física y jurídica expuestas por Márquez, el exjefe de Farc “tuvo la posibilidad de diseñar salidas concertadas con su partido para no sacrificar su obligación de promover la reintegración política colectiva. Tampoco atendió las obligaciones que le imponía la Constitución ni observó lo pactado en el acuerdo”.

Asimilada esta decisión como otra derrota política para la colectividad nacida del Acuerdo (las otras fueron las pocas votaciones para el Congreso y el retiro del candidato en la contienda presidencial), el senador Julián Gallo —Carlos Antonio Lozada—, dejó claro quién reemplazará a Márquez (ver Protagonistas).

“Se abre la posibilidad de que muy pronto pueda tomar posesión de esa curul el siguiente en la lista que es el camarada Benkos Biohó, de manera que una vez conozcamos el sentido del fallo, estaremos buscando la forma de ver cuáles serían los trámites de que decretada esa pérdida de investidura, pueda tomar posesión el siguiente en la lista”, comentó Gallo.

¿SE REPITE LA HISTORIA?

El 11 de octubre de 1987, Iván Márquez no tuvo otra opción más que cumplir la orden de uno de los máximos jefes de las Farc en ese entonces: Jacobo Arenas. Ante el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, UP (partido nacido bajo las negociaciones de esa guerrilla con el presidente Belisario Betancur), el

‘Iván Márquez’ ahora sin curul ¿volvería a las armas?

comandante le dijo que se regresara para Uribe, Meta.

Márquez, elegido representante a la Cámara por Caquetá en 1986, le respondió que el lunes tenía un debate, pero Arenas le restregó la orden. Tomó el camino que comunicaba a Sumapaz con Casa Verde a pie, y se hundió por 30 años en la clandestinidad que le brindó la selva y las armas de una guerrilla en crecimiento.

“Márquez llegó como comandante del Bloque Su-

mantienen el legado de Manuel Marulanda, como lo plantea Jairo Delgado, especialista en Ciencia Política.

Las condiciones, dice el analista, están dadas para un rearme de Iván Márquez. “Las Farc disidentes hoy mantienen un comportamiento similar al de la antigua guerrilla y este sería un espacio para su llegada, la misma que podría justificar al decir que el peor error fue



LAS CONDICIONES están dadas para un rearme de Iván Márquez. “Las Farc disidentes hoy mantienen un comportamiento similar al de la antigua guerrilla y este sería un espacio para su llegada, la misma que podría justificar al decir que el peor error fue entregar las armas”.

JEP EN LA MIRA
DE UN REFERENDO

Podrían abordarlo en las calles y solicitarle su apoyo. La recolección de firmas para el referendo que pretende hacer dos reformas constitucionales —una jurídica, en la que eliminaría la JEP, y una política, que transformaría el Congreso— ya inició. Sus promotores tendrán que recoger 1’853.083 firmas en seis meses. El Centro Democrático apoyaría la iniciativa.

Las dos modificaciones recogen puntos polémicos. La reforma a la justicia incluye: Remover los magistrados actuales y convocar una nueva elección, revocar la JEP y a sus magistrados, retroactivamente modificar las condenas de los exguerrilleros y el régimen de extradición.

De la misma forma, la reforma política acarrearía: Disminuir el tamaño del Congreso en general, 80 miembros en cada cámara; listas cerradas para la elección; 2 curules para víctimas registradas y 2 para desmovilizados de cualquier grupo; impedir la participación electoral de responsables de delitos de guerra y de crímenes de lesa humanidad, y realizar un nuevo código electoral.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?

Aunque, no lo promueve, no lo plantea y no forman

parte del comité promotor, la reforma está en línea con el pensamiento del Centro Democrático. El “Movimiento Libertad y Orden” es el organizador de la iniciativa, sus miembros ideológicamente son cercanos.

Los miembros del comité promotor son: Herbin Hoyos, cercano al Centro Democrático; Marta Ximena Ochoa, que aspiró a la Cámara en Bogotá por el Centro Democrático con el apoyo del actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos; José Raúl Cuesta, Yamiled Nóscue, Fredy Ernesto Izquierdo, víctimas de la Corporación Rosa Blanca, y por último, el vocero del movimiento, Sergio Alzate González, quien fue UTL de la actual embajadora en Suiza, Sofía Gaviria.

El vocero del movimiento, Sergio Alzate González, manifestó que cuentan con un equipo de abogados con el más alto prestigio debido a que “sabemos que la izquierda va a hacer un ataque”.

Para lograr la meta de las firmas, el movimiento “se encuentran en proceso de inscripción de voluntarios, esperamos lograr 20 mil comités, en este momento tenemos 4 mil”, dijo Alzate. Además, ante la pregunta por la financiación, el vocero afirmó que pretenden hacer una “vacatón” para reunir el dinero que costaría la reco-

lección.

Dicho esto, el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, este viernes, le dio un pequeño guiño a la iniciativa cuando expresó en W Radio que “el referendo a la JEP no es nuestro, pero yo firmaría varios puntos”.

Del mismo modo, el representante, Juan Espinal, afirmó que “es la oportunidad que tenemos millones de colombianos que votamos no al plebiscito, para restablecer nuestra Constitución y la Ley”.

Las voces de rechazo a la propuesta no se hicieron esperar. La representante por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien ha sido defensora del acuerdo, dijo que “pone en riesgo el Acuerdo de Paz y el Estado de derecho, es un ataque a las altas cortes, que ordena revocar a sus miembros”.

Para concluir, la directora de la especialización en Marketing Político de la Universidad Externado, Angie Katherine González, el país ya se encuentra polarizado y esto, de cara a las elecciones regionales, sería imponer como “caballito de batalla el tema de la paz en la agenda, y dejar atrás los temas importantes de ciudad como movilidad, infraestructura y de nuevo abanderar el tema de a favor o en contra de la paz”. /COLPRENSA

Alerta por aumento de violencia política electoral

Según la MOE, desde octubre han sido eliminados 65 líderes que participaban en actividades proelitistas de cara a los comicios.

Una alerta sobre el incremento de la violencia a medida que se acercan las elecciones prendió la Misión de Observación Electoral (MOE).

Según un informe divulgado ayer, mayo fue el más violento desde que inició el calendario electoral, 27 de octubre de 2018.

Según los registros de la MOE, organización entre enero y mayo de 2015 se habían presentado 15 agresiones contra precandidatos, mientras que en lo corrido de 2019 se han registrado 24 agresiones, incluyendo cinco asesinatos.

Desde el 25 de octubre de 2014 hasta el 25 de octubre de 2015 hubo 191 hechos de violencia contra líderes sociales y comunales, incluyendo 22 asesinatos, 19 de ellos contra dirigentes políticos.

“De esta forma se evidencia que, pese a que el país debería estar en proceso de consolidación de la paz en todo su territorio, la violencia política no solo se está presentando con más antelación, también de forma más frecuente y letal”, aseguró la MOE.

Sumada a la violencia por motivos electorales, la MOE asegura que desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de mayo de 2019, se han registrado los casos de 228 líderes políticos, sociales y/o comunales víctimas de violencia a nivel nacional. De estos, 65 (29%) fueron asesinados.

La MOE aseguró que “llama la atención



LA DIRECTORA DE LA MOE, Alejandra Barrios, afirmó que “la violencia política en mayo estaba prevista desde principio de año, pues se había advertido en su momento sobre el riesgo de que en momentos clave del calendario electoral, como las consultas partidistas en mayo, la inscripción de candidatos en julio, o las elecciones mismas en octubre coincidirían con incrementos en la violencia, como se ha observado en años anteriores”.

sobre los casos de asesinato y atentados a precandidatos a las alcaldías, puesto que ya van cinco precandidatos asesinados en este periodo de tiempo. Las agresiones se han presentado en 111 municipios (9,8% del total nacional) en 22 departamentos (70%) del país”.

ESTABA PREVISTO

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, afirmó que “la violencia política en mayo estaba prevista desde principio de año, pues se había advertido en su momento sobre el riesgo de que en momentos clave del calendario electoral, como las consultas partidistas en mayo, la inscripción de candidatos en julio, o las elecciones mismas en octubre coincidirían con incrementos en la violencia, como se ha observado en años anteriores”.

La MOE le hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar una ruta de acción articulada de las autoridades, “específicamente dirigida a prevenir y mitigar la violencia contra líderes políticos, pues el Plan de Acción Oportuna del actual Gobierno se enfoca en líderes sociales, comunales y periodistas, sacando a los precandidatos y líderes políticos, quienes conforme avance el proceso electoral y se aumente su exposición, serán más afectados por la violencia”.

El jueves, el procurador general Fernando Carrillo juzgó que se han multiplicado “los factores de riesgo que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en época electoral”.

“Estamos a menos de seis meses de un debate electoral y la violencia contra los líderes sociales se recrudece en estas épocas. Aquí hay un elemento, no marginal sino vertebral, para el análisis de lo que representa en adelante su protección”, dijo.

Carrillo señaló que el combustible de todo este exterminio han sido las economías ilegales y el narcotráfico, más en un departamento que está de tercero en la lista de producción de narcóticos en el país.

“De ahí la importancia de la movilización que todavía espera este país para inmovilizar a los victimarios de los líderes sociales,

que sigue siendo una tarea pendiente más en una zona y en un departamento como este donde hay carencias y las dificultades históricas en la garantía de los derechos humanos”, puntualizó.

SEGURIDAD

En abril, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe en el que contabilizó “42 hechos de violencia electoral, que dejaron un total de 80 víctimas” entre el 27 de octubre de 2018 y el 30 de marzo de 2019, “excluyendo los hechos perpetrados contra líderes sociales”.

Según dicho estudio, los sectores políticos más victimizados son aquellos que se encuentran en crecimiento, es decir, los sectores alineados con el gobierno y los partidos de oposición. Contra partidos de gobierno se registraron 17 hechos (21,25%) y en contra de los independientes 12 (15%); por su parte, los partidos de oposición encabezaron la tendencia con 25 casos, que suman el 31,25% de todos los hechos registrados.

El Gobierno ha asegurado en múltiples ocasiones su compromiso con la seguridad en las elecciones, de hecho, anunció en febrero la firma de un convenio que permite el fortalecimiento de la transparencia, acceso a la información y seguridad de autoridades electorales.

“Este acuerdo pretende que tengamos un muro de contención entre la MOE y el Gobierno para garantizar la transparencia en las elecciones”, dijo en su momento la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

La Ministra explicó que el tema de la seguridad es importante en la “estrategia que vamos a construir. Con la MOE hemos querido explorar acciones e invitamos a los ciudadanos a denunciar los delitos”.